



## TRANSICIONES

VÍCTOR A. ESPINOZA

*De nuevo*

A partir de 1983 los sucesivos gobiernos mexicanos han incorporado a sus programas políticas de reducción de los aparatos administrativos y de control del gasto público. De manera casi obsesiva han aplicado recetas de austeridad para paliar el déficit en las finanzas públicas. Esas acciones fueron promocionadas como parte fundamental de la estrategia de reforma del Estado. En su diagnóstico el "Estado obeso" (Miguel de la Madrid) era incapaz de funcionar de manera eficiente.

Con Carlos Salinas de Gortari se partía de la premisa de que el "Estado abrumado", que se encontraba demasiado ocupado en administrar sus activos, no podía dedicarse a proporcionar la justicia que la sociedad demandaba. Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, si bien no se utilizó una calificación especial, sí se prosiguió con la reducción de los aparatos burocráticos. Con el "Gobierno del cambio" encabezado por Vicente Fox, se volvió a priorizar la política reduccionista.

Bajo el modelo de que mejor gobierna, quien menos gobierna, una y otra vez a partir de 2000 se ha promocionado la idea de que la "burocracia de escritorio" es casi una mala palabra; por ello conviene deshacerse de ese sector parasitario.

La idea de que toda la burocracia es improductiva se encuentra muy arraigada en la visión empresarial. Por ello, los últimos gobiernos se han empeñado en su reducción. Las medidas contraccionistas han producido un cambio muy importante en el patrón de crecimiento de la burocracia mexicana. De crecer a tasas del 6% anual en décadas pasadas se ha pasado al 2% en los últimos 5 años.

El Estado mexicano dejó de ser el gran empleador y dinamizador de la demanda social. El anuncio de la decisión de despedir en breve a 50 mil burócratas, se inscribe en dicho contexto. Estamos hablando de 200 mil trabajadores al servicio del Estado (150 mil a la mitad del sexenio) condenados a engrosar las filas de los desempleados durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox.

Como quedó demostrado en los sexenios anteriores, los recortes de personal en el sector público poco han contribuido al ahorro público y sí han generado un fuerte desempleo. Es decir, los grandes gastos gubernamentales no se modifican sustancialmente con el despido de burócratas. Si bien la racionalización de los gastos de operación es imprescindible, el dispendio no parece encontrarse en la base de la pirámide de la burocracia.

En promedio los salarios de los candidatos al despido es de 3 mil 500 pesos al mes; por ello para lograr un mínimo impacto en las finanzas públicas se requiere una suma muy alta de despidos. Llama la atención la forma como ha crecido la llamada "alta burocracia" durante el Gobierno foxista.

Según la Secretaría de Hacienda, en los últimos años se incrementaron en 634 las plazas de mandos medios y superiores. De ellos, 14 corresponden a subsecretarios y 613 directores generales; de ellos 54 nuevos directores corresponden a la Presidencia de la República. En total, al finalizar el gobierno de Ernesto Zedillo la "alta burocracia" se componía por 1 475 personas y para diciembre de 2003 la cifra se situaba en 2 mil 109.

Como en el pasado, la iniciativa privada ha rechazado contratar a burócratas despedidos. Dirigentes empresariales han señalado que no tienen "obligación" de dar empleo a los corridos. Será la recuperación económica la que permita reabsorber el desempleo. Por su parte, Vicente Fox propone una salida: Que se autoempleen, es decir, que formen su propio changarro.

Me parece que la estrategia reduccionista aprovecha la división en la que se encuentran los trabajadores al servicio del Estado luego del conflicto que enfrentó a la dirigencia nacional del PRI. El resquebrajamiento de la otrora poderosa Fstse provoca un escenario diferente al que enfrentaron los presidentes a partir de 1983. El frente común que presentaron los burócratas anteriormente hoy ya no parece posible; por ello, las reducciones de personal de base encuentran menos resistencias.

Me preocupa sobremanera que la reducción de personal pudiera obedecer a una decisión revanchista del Ejecutivo ante la frustrada reforma fiscal; pasarle una factura tan alta a la sociedad por ajustar cuentas con el PRI y sus diputados no parece un camino correcto y, sobre todo, sano.